Vol. 11 No. 2 julio del 2002

WOLA

ENLACE

Política y Derechos Humanos en las Américas

WOLA Tiene Nuevo Director Ejecutivo

La Junta Directiva de la **Washington Office on Latin America** *ha seleccionado a Bill Spencer para el puesto de Director Ejecutivo. El Sr. Spencer ha servido como Director Adjunto de WOLA desde 1995; anteriormente trabajó durante dos años como asistente legislativo para asuntos de defensa y política externa en la oficina del congresista Joseph P. Kennedy (D-MA), y fue Director del Grupo de Trabajo para América Central (CAWG) durante cinco años. Asumió su nuevo puesto en abril del 2002.*

CONTENIDO

Estados Unidos y Colombia: Cuatro cosas que los gestores de políticas deberían considerar 3

Reforma policial y comunidad internacional: de los procesos de paz a los gobiernos democráticos 5

Actividades de WOLA 6

Tendencias divergentes en las relaciones cubano-estadounidenses 10

In Memoriam 11

El impacto de la política estadounidense de control internacional de drogas sobre la democracia y los derechos humanos en América Latina

En octubre del 2001, WOLA lanzó un proyecto de tres años para estudiar el impacto de la política estadounidense de control internacional de drogas sobre la democracia y los derechos humanos en América Latina. El proyecto propone examinar cómo afecta la guerra a las drogas el terreno de las políticas e instituciones fundamentales para el futuro de la democracia y los derechos humanos, incluyendo el ejército y los servicios de inteligencia, la policía, y los sistemas judiciales. Este estudio constituirá el primer monitoreo sistemático de nivel regional, documentación y análisis de lo que significa en la región la guerra estadounidense a las drogas para la democracia y los derechos humanos. El objetivo del estudio es hacer que este asunto se vuelva un componente importante de la discusión pública, y tema de debate en las políticas, tanto en Estados Unidos como en América Latina.

El estudio es importante porque EE.UU. ha gastado más de 25 mil millones de dólares en los últimos 15 años en programas internacionales de control de drogas. El efecto sobre la oferta de cocaína y heroína que entra en Estados Unidos ha sido insignificante. Sin embargo, el escalamiento de la guerra a las drogas ha traído diferentes consecuencias, a menudo profundamente desastrosas, en toda la región. Ha puesto en tensión a sistemas políticos democráticos frágiles, y ha ignorado las tendencias abusivas de las fuerzas de seguridad de la región. Además, tal como están diseñadas actualmente, las estrategias antinarcóticos de EE.UU. amenazan socavar otros programas subvencionados también por EE.UU., diseñados éstos para fortalecer la democracia y el buen gobierno.

Esta investigación se ha vuelto más importante desde el colapso de las conversaciones de paz en Colombia y de los esfuerzos que siguieron de parte de la administración de Bush para incrementar la ayuda militar y eliminar todas las restricciones para su uso. Bajo las propuestas de la administración, los recursos de Estados Unidos ya no estarán limitados a las actividades antinarcóticos en Colombia, pudiendo ser utilizados ahora para

continuará en la página 2

WOLA: Washington Office on Latin America 1630 Connecticut Avenue, NW, Washington, DC 20009
Telephone: 202-797-2171 ■ Fax: 202-797-2172 ■ Email: wola@wola.org ■ Website: http://www.wola.org

WOLA Junta Directiva

Joseph Eldridge, Chair
Kay Spiritual Life Center, American University

Mayra Buvinic
Inter-American Development Bank

Marie Dennis
Maryknoll Office for Global Concerns

Richard Erstad, Secretary, Treasurer
American Friends Service Committee

Ralph Fine
Consultant

Seamus Finn, OMI
Oblates Peace and Justice Commission

Lisa Fuentes
Department of Sociology, American University

Louis W. Goodman
School of International Service, American University

William LeoGrande
School of Public Affairs; Department of Government; American University

Danuta Lockett
Senior Program Advisor
Victims of Torture Fund

Cynthia McClintock
Department of Political Science, The George Washington University

Cheryl Morden
International Center for Research on Women

Margaret Roggensack, Vice-Chair
Hogan and Hartson

Lars Schoultz
Department of Political Science, University of North Carolina at Chapel Hill

Michael Shifter
Inter-American Dialogue

Bill Spencer
Washington Office on Latin America

José Miguel Vivanco
Americas Division of Human Rights Watch

Alex Wilde
Vice President for Communications
Ford Foundation

Sally Yudelman
International Center for Research on Women

A. Lee Zeigler
Former Director of Bechtel Int'l Center, Stanford University

ENLACE
Vol. 11 No. 2
ISSN 1059-6402
julio del 2002

Drogas y democracia

viene de la página 1

actividades contrainsurgentes. Incluso, ha quedado amenazada la protección a los derechos humanos más básicos en el uso de la ayuda estadounidense. Al mismo tiempo, el gobierno de EE.UU. en su discurso ha hecho una relación entre narcotráfico y terrorismo, contribuyendo con eso a convencer tanto a los gestores de políticas como al público que Washington debe involucrarse más en los esfuerzos contrainsurgentes en Colombia. Los paramilitares y las guerrillas están en la lista de EE.UU. de organizaciones terroristas, a la vez que están involucrados en el narcotráfico para financiar sus actividades. Es así que este nuevo discurso podría conducir a un compromiso costoso y prolongado de EE.UU. con una guerra imposible de ganar.

...el gobierno de EE.UU. en su discurso ha hecho una relación entre narcotráfico y terrorismo, contribuyendo con eso a convencer tanto a los gestores de políticas como al público que Washington debe involucrarse más en los esfuerzos contrainsurgentes en Colombia.

El proyecto

A través de nuestra investigación, WOLA quiere: 1) construir un cuadro amplio de las políticas y programas antinarcóticos de EE.UU. para América Latina; 2) desarrollar una visión del impacto de esos programas sobre la democracia y los derechos humanos, y 3) elaborar estudios de caso detallados de estos impactos en ocho países de la región. Observaremos los lazos y relaciones entre, por un lado, las políticas antidrogas de EE.UU., la financiación e implementación de programas, y por el otro, las dificultades que enfrentan los gobiernos latinoamericanos para ejercer el control civil y supervisión de las actividades militares—marcadas por el abuso a los derechos humanos—o para avanzar en el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Durante el curso del proyecto, WOLA publicará resultados provisorios selectos de la investigación y del monitoreo en el terreno. Estos informes, que se publicarán varias veces al año, se referirán a asuntos destacados específicos dentro del marco del proyecto en su conjunto. Serán distribuidos ampliamente en los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, académicos y gestores de políticas en EE.UU. y América Latina, como apoyo a las iniciativas de incidencia y al debate de las políticas en todo el continente. Los resultados finales de la investigación, documentación y análisis sobre las políticas estadounidenses y su impacto en la región serán publicados en un extenso libro en inglés y español.

El proyecto incluirá reportes extensos y actualizados sobre:

- Programas estadounidenses de ayuda en seguridad relacionados con el control internacional de drogas en América Latina, lo que incluye el trabajo en las áreas de políticas, doctrina, entrenamiento, y suministro de equipo letal y no letal a los ejércitos latinoamericanos por el gobierno de EE.UU., en colaboración con el proyecto "Sólo los hechos" del *Latin America Working Group* y el *Center for International Policy*.
- Programas de policía y de asistencia a la policía en el país. En un esfuerzo completamente innovador, WOLA tratará de mapear estos programas, enfocándose en el trabajo de la Agencia Antidrogas (DEA) y de la Oficina

continuará en la página 11

Estados Unidos y Colombia:

Cuatro cosas que los gestores de políticas deberían considerar

Ahora que el gobierno colombiano ha puesto fin a tres años de diálogo con las FARC, y que los colombianos han elegido a un nuevo presidente comprometido en combatir a los insurgentes con 'mano firme,' el gobierno estadounidense está considerando nuevas vías de compromiso con esa atribulada nación. Durante años, Colombia ha pedido la ayuda de EE.UU. para combatir a las FARC, pero Washington ha limitado su apoyo al combate del narcotráfico, del cual se lucran considerablemente las FARC. Pero ahora, algunas figuras clave del gobierno y del Congreso quieren incluir a Colombia en la campaña estadounidense contra el terrorismo y están pidiendo que se borre la "línea artificial" existente entre narcotraficantes y guerrilleros, principalmente caracterizando a las FARC como terroristas de alcance global.

Los dos proyectos de ley en discusión actualmente en el Congreso—un pedido de asignaciones suplementarias de emergencia y el proyecto de ley anual de ayuda exterior—levantarían potencialmente las condiciones de derechos humanos establecidas previamente para la ayuda, permitirían que la ayuda pasada y futura fuera usada directamente en operaciones contrainsurgentes, reducirían la supervisión del Congreso de los entrenamientos militares extranjeros, y ayudarían a proteger un oleoducto colombiano que usa la empresa californiana *Occidental Petroleum*. Ante esta grave circunstancia que podría significar una mayor implicación por parte de EE.UU., los legisladores deberían preguntarse de manera urgente si ambos gobiernos han identificado correctamente las causas subyacentes del conflicto colombiano, y cómo podrían ayudar mejor los actores internacionales.

Para comenzar, los gestores de políticas deberían tener la suficiente visión para reconocer que los problemas colombianos vienen desde hace tiempo, que se han extendido, y que son difíciles de resolver. Su solución requeriría un enfoque holístico de largo plazo, en vez del auge militarista que está teniendo lugar actualmente. Este conflicto no se va a ganar militarmente, y si EE.UU. no consigue discurrir de manera honesta y concienzuda sobre el conflicto colombiano, podría estar contribuyendo a la prolongación de un punto muerto con consecuencias nefastas para los colombianos.

Por qué un paso atrás es un paso adelante

1. **Los gestores de políticas no deben dejarse confundir por un lenguaje que simplifica al máximo la historia.** Se han acuñado términos llamativos como "narcoguerrillas", "narcoterroristas" y "guerrillas narcoterroristas" para describir a los grupos ilegales armados en Colombia. Estos términos, que pretenden clarificar una situación compleja, irónicamente muestran lo difícil que es disociar la violencia colombiana, por cuanto que apuntan a una combinación fatal de insurgencia, terrorismo y narcotráfico que implica a millones de civiles inocentes. La retórica de guerra interpreta a su manera asuntos complejos, como los 38 años de historia de las guerrillas (algunos historiadores sitúan sus orígenes en 1900), el hecho de que los paramilitares aparecieran inicialmente en los años 40, y el que la violencia sea endémica en el país (el período de mediados del siglo conocido como 'La Violencia' fue más sangriento que el actual). Los problemas de Colombia no comenzaron el 11 de septiembre, ni siquiera con el narcotráfico. Las simples consignas de una guerra antiterrorista o de una guerra a las drogas no van a resolver estas lesiones históricas.

Este conflicto no se va a ganar militarmente, y si EE.UU. no consigue discurrir de manera honesta y concienzuda sobre el conflicto colombiano, podría estar contribuyendo a la prolongación de un punto muerto con consecuencias nefastas para los colombianos.

Sin embargo, el gobierno colombiano y la línea dura estadounidense han tratado de vender un mensaje limitado: que la culpa de los problemas colombianos la tienen las FARC, y que éstas pueden ser derrotadas militarmente si EE.UU. contribuye más y de otros modos a como lo hace actualmente. Debería entenderse que las FARC no son un actor aislado, sino una parte de un escenario más grande. Las FARC y el ELN, a pesar de sus objetivos militares y de sus apabullantes violaciones a la ley internacional humanitaria, mantienen aún ideologías políticas. Del mismo modo, tras el grueso de las estrategias militares de las AUC hay un claro proyecto político de clase que defiende el *status quo*, y que en sus manifestaciones más extremas, favorece la eliminación de disidentes de cualquier tipo. El conflicto colombiano es, en el fondo, una guerra por el control de territorios que se libra por motivos materiales con un trasfondo ideológico y de clase, alimentado en buena parte por el tráfico de drogas al servicio del voraz mercado estadounidense. Aunque las innumerables acciones hostiles y el mismo Plan Colombia han propiciado un desbordamiento hacia los países vecinos, el conflicto sigue estando dentro del marco de lo doméstico y no debe ser tomado como terrorismo internacional.

continuará en la próxima página

E.E.U.U. y Colombia

viene de la página 3

2. **Los gestores de políticas deben tener presente que ninguno de los grupos en particular hace las veces del malo.** Hay muchas partes en el conflicto y todas son crueles. El ELN y las FARC han sido condenadas con todo derecho por sus bárbaros ataques a civiles y a la infraestructura pública. Las AUC representan también una grave amenaza para la democracia colombiana y un peligro aún más serio para la población civil, en particular para los líderes que defienden la democracia, los derechos humanos, las negociaciones de paz y las reformas sociales. Las AUC, que se han triplicado desde 1998, son responsables en Colombia de la mayoría de los homicidios políticamente motivados, y mantienen lazos claramente documentados con las Fuerzas Armadas de Colombia, quienes, por su parte, se han negado a cooperar con Washington sobre las condiciones de derechos humanos. No obstante, para Bogotá y Washington el combate a las AUC tiene mucho menos prioridad que la lucha contra las FARC.

   El ejército colombiano debería enfrentar a las FARC y a las AUC con la misma fuerza. Mientras no se les enfrente en los mismos términos, cualquier intento de solucionar el problema de las drogas, el terrorismo y la vulnerabilidad democrática del país estará condenado al fracaso. Según las Naciones Unidas, las AUC están más involucradas en el negocio de las drogas que las FARC (su líder, Carlos Castaño, asegura que el 70 porciento de sus ingresos provienen de las drogas), pero Washington enfatiza excesivamente el rol de las FARC en el negocio. Igualmente, durante años el gobierno colombiano se ha referido a las guerrillas como "subversivas" y "terroristas", mientras que a las organizaciones paramilitares se limita a describirlas como "grupos ilegales de autodefensa" surgidos como consecuencia natural.

   Según muchos analistas de asuntos militares, los paramilitares estarían llenando un "vacío en la seguridad" generado por la pobre financiación de las fuerzas armadas. Desafortunadamente, esta "seguridad" esta siendo proporcionada a los altos postores privados y no a las miles de víctimas de las AUC: los desplazados por la fuerza, torturados, desaparecidos, y los ejecutados públicamente. Los colombianos adinerados, a falta de confianza en las fuerzas de seguridad del estado y en el sistema legal que proteja sus intereses, han asumido el asunto por su propia cuenta, financiando a las AUC. Como resultado, las AUC se están saliendo rápidamente del alcance de cualquier control y casi no se ha hecho nada para impedirlo.

3. **Los gestores de políticas deberían definir claramente el "final" para evitar llegar a un punto (inextricable) de no regreso.** Mirados retrospectivamente, los ambiciosos objetivos del Plan Colombia parecen ingenuos, dada la absoluta falta de progreso en cualquiera de las áreas importantes. Antes de decidirse a meterse de lleno, EE.UU. debería establecer cuáles son los problemas fundamentales de Colombia, cuáles son los intereses estadounidenses, y cómo convergen. Los gestores de políticas deberían también señalar cómo se mide el éxito y cuál es la contribución que se espera de Estados Unidos. El gobierno colombiano ha reconocido públicamente que tiene que triplicar o cuadruplicar su tropa de combate para enfrentar de manera efectiva a las FARC. Ciertos funcionarios militares colombianos comentan en privado que EE.UU. necesitaría incrementar su ayuda diez veces durante muchos años para obtener algún impacto. Washington no puede, incluso bajo las circunstancias más disenfrenadas, llenar este enorme vacío.

   Muchos en Washington, tanto de derecha como de izquierda, señalan que Colombia no se ha comprometido realmente a luchar su propia guerra. Los colombianos pagan bajos impuestos, y sólo una pequeña parte del PIB se dedica a la defensa. Aunque lo peor es quizás que las clases medias y altas no están obligadas a servir en unidades de combate, gracias a sobornos o a título legal, en virtud de poseer una educación de nivel de secundaria. Durante demasiado tiempo en Colombia, son los más pobres los que han pagado los costos de la guerra.

4. **Los gestores de políticas deben reconocer que no hay soluciones rápidas y sencillas a los problemas colombianos existentes desde hace largo tiempo. Pero, Colombia necesita desesperadamente la ayuda estadounidense, comenzando por la ayuda económica y social.** Tal ayuda debería dirigirse a reformas judiciales para combatir la lacra de la impunidad, que es lo que permite el funcionamiento sin obstáculos de los negocios criminales. También se deberían reforzar las investigaciones sobre derechos humanos para romper con el ciclo de retribución privada tan común en Colombia. Solamente a través de instituciones civiles transparentes podrían los colombianos sentirse verdaderamente seguros en su propio país.

   La ayuda estadounidense debería enfocarse también en la población desplazada internamente, que hoy alcanza cifras cercanas a los dos millones. Mucha de esta gente, desarraigada y desempleada, es susceptible de unirse a las facciones en guerra por un salario. A menos que se le brinde oportunidades más atractivas, esta gente va a continuar suministrando los cuerpos a una guerra envilecida que no parece querer darse un respiro. Y a menos que EE.UU. reduzca sus propias ansias de droga, va a continuar favoreciendo a las 400-500 organizaciones narcotraficantes que operan en Colombia. ■

Reforma policial y comunidad internacional: de los procesos de paz a los gobiernos democráticos

Desde nuestra fundación en 1974, WOLA ha estado monitoreando el abuso policial y la ayuda internacional estadounidense a la policía. Este programa se incrementó a mediados de los años 90 con los procesos de paz en América Central y la intervención conducida por EE.UU. en Haití, cuando las reformas policiales emergieron como el componente clave de los procesos de democratización y desmilitarización. La región se volvió un terreno de prueba para la ayuda internacional a la reforma de la seguridad después de conflictos. El monitoreo hecho por WOLA de la evolución de la reforma policial en la región nos ha llevado a convencernos de que una consolidación a largo plazo de una policía democrática depende del desarrollo de una mayor participación ciudadana en ésta, y del apoyo a las reformas de la seguridad pública. Desde fines de los años 90, WOLA ha apoyado el desarrollo de organizaciones locales de la sociedad civil que trabajan en asuntos de seguridad pública. En el 2000 y el 2001, dimos apoyo a cinco organizaciones centroamericanas para investigar el status de las reformas policiales en Guatemala, El Salvador y Honduras. En noviembre del 2001, organizamos una importante conferencia internacional para presentar los resultados de ese proyecto, dentro de una perspectiva comparativa con otras experiencias de Sudamérica y Sudáfrica, y para examinar cómo ha evolucionado el compromiso de los donantes con las reformas democráticas de la seguridad pública.

La seguridad pública se ha vuelto en todo el mundo el elemento central de las transiciones de la dictadura o de la guerra civil a la democracia. En países que van desde Europa del Este y Rusia hasta Sudáfrica, se han emprendido o se están emprendiendo esfuerzos para crear unas fuerzas policiales profesionales, responsables y efectivas. Diecisiete de las veintitres operaciones de paz iniciadas en los años 90 incluyeron esfuerzos para construir instituciones policiales locales. Los donantes están apoyando esfuerzos para profesionalizar a las policías a través de programas bilaterales en países de todo el mundo. En muchos de estos casos, los encargados nacionales de las políticas, y en particular los donantes internacionales, se han fijado en las reformas policiales de gran escala y de nivel institucional que tienen lugar en Centroamérica y Haití para extraer modelos de reforma.

Debido al papel central jugado por las fuerzas internas de seguridad en la represión a la población civil en esos países, un tema principal de las negociaciones para finalizar el conflicto fue el de cómo reestructurar y 'desmilitarizar' la responsabilidad por la seguridad interna. En el contexto de las negociaciones, la atención se puso en la separación de la responsabilidad de la seguridad interna y la de la seguridad externa, redefiniendo el rol y la misión del ejército—cuyo foco debe ser la seguridad externa—y el establecimiento del control civil sobre las fuerzas armadas. Al mismo tiempo, se reconoció la necesidad de proveer garantías de seguridad para desmovilizar a los excombatientes y a los oponentes políticos en el período pos-conflicto. Estas reformas negociadas fueron diseñadas para corregir los defectos evidentes del control militar existente ejercido por la fuerza pública, con el fin de evitar que se volvieran a producir los abusos masivos a la población civil que habían caracterizado las guerras civiles de esos países.

La reforma policial se volvió el eje de un esfuerzo para desmantelar estructuras autoritarias y para pasar de una 'policía de régimen' a una 'policía democrática.' El establecimiento de una policía democrática se percibió como una base vital para la seguridad y la estabilidad necesaria que permitiera la consolidación de la democracia y la creación de un ambiente propicio para el desarrollo económico. En paises como El Salvador y Haití se proporcionó una cuantiosa ayuda internacional para este fin, y los donantes internacionales jugaron un papel clave en el suministro de experiencia, entrenamiento y recursos a paises necesitados.

Las reformas en El Salvador, Haití y Guatemala no confrontaron—y hasta cierto punto no podían—las condiciones de seguridad que a menudo prevalecen en los períodos pos-conflicto. Algunos de los rasgos típicos de la situación de seguridad en períodos pos-conflicto son: crisis económica con alto desempleo al final del conflicto; las fuerzas de seguridad militares e internas son una fuerza política importante; y los miembros de las fuerzas insurgentes que esperan su desmovilización temen por su seguridad personal y sus perspectivas económicas. En América Central y en Haití, las malas condiciones económicas y la enorme oferta de armas y de gente que sabía usarlas contribuyeron a un incremento masivo de la criminalidad y la violencia social. La criminalidad rampante amenazaba

En América Central y en Haití, las malas condiciones económicas y la enorme oferta de armas y de gente que sabía usarlas contribuyeron a un incremento masivo de la criminalidad y la violencia social.

continuará en la página 8

Actividades de WOLA

Actividades de WOLA en el 2002 hasta la fecha

Políticas en Washington

- WOLA, Human Rights Watch y Amnistía Internacional publicaron una crítica de 32 páginas al fracaso del gobierno colombiano en cumplir las condiciones de derechos humanos necesarias para la ayuda al ejército de **Colombia** (véase: www.hrw.org/press/2002/02/colombia0205.htm). La conferencia de prensa del 5 de febrero fue cubierta por el *Washington Post*, el *New York Times*, *Associated Press*, la *National Public Radio (NPR)* y el periódico más importante de Bogotá, *El Tiempo*, entre otros.

- El equipo de WOLA continuó con sus esfuerzos de incidencia ante el Congreso, prensa y administración, presionando a favor de una desclasificación de documentos entre las diferentes agencias estadounidenses relacionados con el trabajo de la Comisión de la Verdad del **Perú**.

- WOLA publicó el primer número de '***Colombia** Monitor*,' una nueva serie que combinará análisis oportunos de las dinámicas de las políticas en Washington, con el monitoreo sobre el terreno del impacto de las políticas estadounidenses de control de drogas en la región andina.

- El equipo de WOLA y representantes del *Bank Information Center*, *Interaction*, el *AFL-CIO Solidarity Center* y los Empleados de Servicios Públicos Internacionales tuvieron una serie de encuentros con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre políticas relacionadas con el **Plan Puebla Panamá**.

- Lilah Rosenblum, asistente especial para Cuba, y Geoff Thale, miembro permanente de WOLA, llevaron a comienzos de abril a **Cuba** a una delegación del Congreso.

- WOLA arregló encuentros con el Departamento de Estado de EE.UU. y con funcionarios del Congreso para los familiares y amigos de los cuatro ciudadanos estadounidenses asesinados en **Guatemala**.

- Lilah Rosenblum, asistente especial para Cuba, y Rachel Farley, asistente de programa, se reunieron con personal del Congreso para hablar sobre la legislación pertinente a **Cuba** en el proyecto de ley pendiente de asignaciones agrícolas.

- Geoff Thale, representante de WOLA, y Rachel Farley, asistente de programa, y representantes de organizaciones no gubernamentales de EE.UU. se reunieron con funcionarios de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés) para hablar de sus programas en Centroamérica.

Introducción de voces latinoamericanas

- El personal de WOLA organizó encuentros con encargados de políticas en Washington para representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del **Perú**, una agrupación de las principales organizaciones de derechos humanos del país.

- WOLA ayudó a organizar la visita de los defensores **mexicanos** de derechos humanos de los centros Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Bartolomé de las Casas, entre otros.

- WOLA, la Universidad George Washington, y el *Latin America Working Group* auspiciaron el seminario 'El impacto de la fumigación y de las políticas de desarrollo alternativo en el sur de **Colombia**' que tuvo tres ponentes: Dr. Fabio Trujillo, secretario de agricultura y medio ambiente del departamento de Nariño; Eder Sánchez, de la Asociación Nacional de Pequeños Campesinos, provincia de Putumayo; y la Dra. Dyva Revelo, de la agencia de salud de Putumayo.

- WOLA le organizó encuentros con encargados de políticas en Washington a Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, sobre la actual situación en **Guatemala**.

- WOLA apoyó la participación de la sociedad civil en el encuentro del Grupo Consultivo sobre **Guatemala**, sostenido en el Banco Interamericano de Desarrollo.

- WOLA arregló encuentros con encargados de políticas en Washington y el BID para Frank La Rue, director ejecutivo del Centro de Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH), **Guatemala**.

- WOLA organizó la visita de Jon Cortina y Azucena Mejía, de la 'Asociación Pro-Búsqueda de Niños Desaparecidos' de **El Salvador**, arreglándoles encuentros con organizaciones de derechos humanos y encargados de políticas.

- WOLA y el Seminario de Políticas y Cultura Andina de la Universidad George Washington coordinaron el seminario "¿Está bien encaminada la política económica del **Perú**?" que contó con la participación de la profesora Carol Wise, el embajador peruano Dr. Allan Wagner, y el analista peruano Richard Dawson.

- WOLA y la Universidad George Washington auspiciaron el seminario, 'En búsqueda de verdad y justicia en el Perú,' con Francisco Soberón y Pablo Rojas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y Peter Kornbluh y Tamara Feinstein del *National Security Archive*.

Actividades de WOLA

- WOLA y la Universidad George Washington organizaron un seminario sobre la **región andina**, 'Movimientos indígenas y partidos políticos en Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela,' con la presentación de Donna Van Cott.
- WOLA y la Universidad George Washington organizaron el seminario 'El movimiento sindical en la **Bolivia** de hoy,'con Saturnino Mallcu, líder del sindicato de mineros bolivianos.
- WOLA participó en la organización de un seminario con Joel Suárez, coordinador del Centro Martin Luther King en **Cuba**.
- WOLA, NISGUA, el *Latin America Working Group* y la Comisión Guatemalteca de Derechos Humanos organizaron una presentación ante el Congreso titulada, 'Justicia pospuesta: nuevos esfuerzos para responsabilizar a los dictadores **guatemaltecos,**' con Pedro Canil, líder de la Asociación para Justicia y Reconciliación; Paulina Ixpata de Osorio, miembro de la comunidad Xeseguan y demandante de los casos de genocidio; Frank La Rue, director ejecutivo del Centro para Acción Legal de Derechos Humanos; Alex Arriaga, director de relaciones de gobierno para Amnistía Internacional EE.UU.; y el experto en Guatemala, Hugh Byrne.
- WOLA y el *International Human Rights Law Group* organizaron un seminario con Víctor Abramovich, director del Centro de Estudios Legales Sociales (CELS) en **Argentina**, para discutir sobre derechos humanos y las dimensiones políticas y sociales de la crisis en Argentina.
- WOLA y la *Nicaragua Network* co-auspiciaron un seminario con Silvia Argüello, coordinadora de incidencia medioambiental del Centro Alexander von Humboldt en **Nicaragua**, sobre los posibles efectos del propuesto Plan Puebla Panamá.

WOLA en América Latina

- Vicki Gass, consultora en asuntos económicos y del huracán Mitch, junto con los representantes de WOLA Geoff Thale y Eric Olson, dirigieron varios talleres con representantes de la sociedad civil en **El Salvador**, **Honduras** y **Nicaragua**, para presentar los resultados del estudio de WOLA sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los esfuerzos de reconstrucción hechos después del huracán Mitch.
- Rachel Neild, representante de WOLA, viajó a la Ciudad de **México** para tomar parte en un seminario en donde se presentaron los resultados de un diagnóstico de temas de seguridad local en el área de Villa Coapa en Tlapán, al sur de la ciudad. WOLA está trabajando en coordinación con colegas mexicanos para apoyar el desarrollo de iniciativas de prevención local en esa área.
- Susan Peacock, representante de WOLA, viajó a **Guatemala** con el Foro Ecuménico para la Paz y la Reconciliación, una alianza de líderes guatemaltecos católicos y evangelistas que trata de generar apoyo para el proceso de paz.
- Rachel Neild y Eric Olson, representantes de WOLA, viajaron a la Ciudad de **México** para asistir a un seminario sobre prevención municipal del crimen en Iztacalco.

Conferencias y Eventos

- Coletta Youngers, representante de WOLA, tomó parte en un taller internacional, 'El rol del **desarrollo alternativo** en el control de drogas y la cooperación al desarrollo,' organizado por la agencia de cooperación del gobierno alemán, GTZ, la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas, PNUFID.
- WOLA y la Universidad George Washington co-auspiciaron una conferencia de un día titulada, 'Reforma policial y cooperación internacional: evaluación de la necesidad de un diálogo **México**-EE.UU.'
- Jason Hagen, representante de WOLA, habló en la conferencia titulada, '**Colombia** y EE.UU.—Reconsideración de la Guerra a las Drogas,' organizada por la Universidad de Pennsylvania, en un panel con el embajador colombiano Luis Alberto Moreno, el subsecretario de estado para el control internacional de narcóticos Rand Beers, y César Gaviria, ex presidente de Colombia y secretario general de la Organización de Estados Americanos.
- WOLA organizó el seminario titulado 'Defensores mexicanos de los derechos humanos y su lucha en pro de la responsabilidad.'
- Jason Hagen, representante de WOLA, asistió a una conferencia en Miami organizada por el Colegio de Guerra del ejército estadounidense y el Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami, titulada 'La guerra ambigua de **Colombia** en el contexto regional y el contexto global: insurgencia, crimen transnacional y terror.'

WOLA en las noticias

- Jason Hagen, representante de WOLA, fue citado en sus comentarios sobre la política estadounidense para **Colom-**

continuará en la página 11

Reforma policial y comunidad internacional

viene de la página 5

sobrepasar la capacidad de las nacientes fuerzas policiales civiles, generaba el apoyo público a los elementos de línea dura que se oponían al proceso de reforma, y acrecentaba una amplia demanda pública a favor de medidas fuertes contra la criminalidad. La paradoja de las reformas policiales pos-conflicto es que estos escenarios ofrecen oportunidades únicas de reconceptualizar y dar nueva forma a las instituciones policiales y doctrinas, pero también un ambiente profundamente hostil para la implementación de planes ambiciosos de reforma.

Según las encuestas, desde hace varios años la criminalidad está entre las más altas, o es la mayor inquietud de los ciudadanos en paises de toda América Latina. Las tasas de aumento de la criminalidad han hecho que la atención nacional e internacional ponga mayor atención en el costo que tienen la violencia social y la criminalidad para el desarrollo, así como el costo que tienen sobre la seguridad individual. Lo destacado de estos temas está trayendo a un nuevo grupo de actores internacionales dentro de la arena de la reforma a la seguridad pública. Entre otros, el Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho un número de préstamos destinados a prevención del crimen y a iniciativas de seguridad pública, y ha diseñado guías de políticas para préstamos en el área, las cuales han sido estudiadas junto con organizaciones de derechos humanos, entre las cuales, WOLA.

Las tasas de aumento de la criminalidad han hecho que la atención nacional e internacional ponga mayor atención en el costo que tienen la violencia social y la criminalidad para el desarrollo, así como el costo que tienen sobre la seguridad individual.

La conferencia de WOLA de noviembre del 2001, 'Reforma policial y comunidad internacional: de los procesos de paz a los gobiernos democráticos,' reunió a donantes que trabajan en escenarios pos-conflicto con donantes de agencias de desarrollo. A pesar de que estos últimos le dan atención sobre todo a asuntos de desarrollo y de gobierno, están enfrentando cada vez más las dificultades que la inseguridad y que las numerosas respuestas oficiales y no oficiales a la inseguridad le plantean a la democracia, a los derechos humanos y al desarrollo de la región.

Se han sacado lecciones importantes del apoyo de los donantes a las reformas pos-conflicto. Un punto débil de estas lecciones es que la atención central se ha dirigido a los temas relacionados con la entrega de la ayuda en si misma, y al logro de objetivos de corto plazo, dándosele menos atención a la sostenibilidad de una policía democrática en turbulentos escenarios pos-conflicto, y a los puntos de vista de los beneficiarios locales de los procesos de reforma.

Los programas de ayuda requeridos están llevando a los donantes a trabajar en escenarios en donde los parámetros de reforma policial son con frecuencia más restringidos, y en donde también es más limitada la influencia internacional para darle forma al proceso de reforma. Efectivamente, la manera como surgen las reformas—a través de iniciativas gubernamentales o policiales, o a través de acuerdos políticos alentados por las presiones de la sociedad civil—tiene una influencia esencial en la conformación y limitaciones de las estrategias y focos de los procesos de reforma. En estos escenarios cada vez más complejos, los donantes evalúan puntos estratégicos de acceso para apoyar las reformas democráticas que produzcan un mejoramiento de la actuación de la policía en su función de ofrecer más seguridad y más respeto a los derechos humanos. Una reforma policial exitosa—es de esperar—va a tener mayores efectos en la satisfacción pública, en el apoyo a la democracia y en la creación de un ambiente propicio para actividades económicas y de desarrollo.

Las presentaciones en la conferencia afirmaron que está surgiendo un marco conceptual de 'policía democrática' y existe un consenso emergente sobre los parámetros de ésta. Los participantes observaron también que hay elementos técnicos comunes de policía, y un presentador pidió que un sólo cuerpo—las Naciones Unidas—se encargue de desarrollar la normativa básica para el entrenamiento policial internacional.

Los principios de una policía democrática proveen guías clave para los reformadores, pero no obvian la necesidad de una asistencia. No hay claramente un sólo modelo de policía democrática que puede ser simplemente trasferido de país a país. Los donantes tienen que ser conscientes de las realidades locales, y tener en cuenta que habrá que sacrificar alguna eficiencia a la necesidad de entender y adaptar las realidades locales. Esta es una necesidad aún más grande en reformas parciales o restringidas.

Los donantes notaron la necesidad de construir una memoria y capacidad institucional en su apoyo a la seguridad pública, y de evitar tener que 'reinventar la rueda' con cada nuevo programa. Un mejoramiento de la ayuda policial requiere un mejoramiento de la cooperación entre profesionales expertos de policía, profesionales del desarrollo y expertos en países. La comunicación entre las perspectivas y culturas dispares que prevalecen en estas tres especialidades no es fácil. Esta se hace incluso más difícil cuando tampoco existe una coordinación entre los donantes de los diferentes países. Un panelista notó que mientras la reforma judicial en América Latina ha recibido importante apoyo multilateral, la ayuda a la reforma policial ha tendido a ser bilateral, aumentando la necesidad de coordinación.

La discusión durante la conferencia resaltó también el desperdicio y confusión creados por la falta de coordinación de los donantes y la presencia de entrenadores y expertos de

continuará en la página 9

Reforma policial y comunidad internacional

viene de la página 8

policía de diferentes países, cada uno con su propia manera de hacer las cosas. Un ex jefe de policía de El Salvador adujo que los gobiernos locales deben tomar una mayor responsabilidad en la coordinación, desarrollando su propia visión e imponiendo orden en los ofrecimientos de ayuda. Con frecuencia, los gobiernos que reciben ayuda policial no tienen una idea clara sobre el modelo de policía que quieren adoptar. La ayuda a la policía no siempre provee aportes prácticos para estas consideraciones, ya que frecuentemente se orienta más hacia asuntos técnicos en vez de institucionales.

Los conferenciantes notaron que la apropiación local de la reforma es débil cuando se impone externamente, e insistieron en que los donantes necesitan prestar más atención a la construcción de un mayor apoyo interno. En la discusión surgieron dos estrategias: varias agencias internacionales están desarrollando un 'modelo participativo policial' que da prioridad a la coordinación entre los donantes, y de éstos con las autoridades nacionales y socios locales, para desarrollar algunas de las estrategias de reforma. Este enfoque participativo ofrece un espacio en el cual los encargados nacionales de las decisiones pueden desarrollar e invertir en su propio modelo policial (dentro de los parámetros conceptuales de policía democrática) y suministrar un marco para un mejor diálogo con los donantes sobre sus necesidades.

En la conferencia, muchos donantes se refirieron a la necesidad de conseguir una mayor participación de la sociedad civil en los procesos de reforma policial. Se argumentó que tal participación podía apoyar la construcción de un consenso nacional acerca de la necesidad de reformas y cómo diseñarlas, podía incrementar el apoyo político tan necesitado en las reformas, y proveer mayores aportes locales y una retroalimentación que aumentaría la posibilidad de adaptar las reformas a los contextos locales. Mientras los analistas de la sociedad civil apoyaron estos principios, sus presentaciones revelaron las dificultades que afectan la participación. En Sudáfrica, la naturaleza fragmentada de las comunidades significa que éstas igualmente pueden generar demandas para policías represivas, así como demandas para mejorar la responsabilidad policial. En América Central, las sociedades enormemente polarizadas y traumatizadas por la guerra tienen gran dificultad en entrar en un diálogo entre sectores tradicionalmente hostiles. Las relaciones se ven obstaculizadas además, por la falta de pericia civil como consecuencia de años de prácticas de seguridad interna militarizada. Fuera de eso, los grupos de la sociedad civil siguen desconfiando profundamente del estado, los cuales, en los países estudiados de Centroamérica, han continuado en manos de gobiernos conservadores y centralizados.

Además de las condiciones ambientales no propicias para la reforma, como el auge de la criminalidad, los reformadores enfrentan profundas restricciones institucionales. Sudáfrica confrontó problemas que iban de una 'brecha entre el la formulación de políticas policiales basadas en una visión' y la 'inexistente capacidad de las instituciones para cumplir con esa visión'. Los diseños de reforma demasiado ambiciosos no han logrado hacer frente a necesidades de corto plazo, e incluso pueden crear una percepción de fracaso si se ponen los objetivos muy altos. Las reformas policiales deben esforzarse para entregar mejoras de servicio a corto plazo, incluso cuando se las considera como proposiciones inherentes de largo plazo.

Las discusiones de la conferencia se enfocaron insistentemente en la necesidad de abandonar la actitud de que hay que sacrificar la rendición de cuentas por parte de la policía para lograr una policía más efectiva. Según algunos panelistas, las evidencias indican que la responsabilidad policial es, de hecho, más efectiva, y que una policía represiva o abusiva, de hecho, impide mejoras en el orden público y en la aplicación de la ley. No obstante, sin importar lo contundente de nuestros argumentos al contrario, la realidad en América Latina y en la mayoría de comunidades en Sudáfrica es que la efectividad policial se percibe como algo que requiere enfoques represivos que deroga garantías a los derechos.

Las reformas deben considerar la necesidad de enfoques de corto y largo plazo, con objetivos realistas y resultados a corto plazo que ayuden a mantener el apoyo público a las reformas, a pesar del paso lento en que avanza la reforma institucional. El problema de los reformadores es considerar cómo estructurar un proceso incrementalista capaz de avanzar de manera consistente en el largo plazo, y que no sacrifique iniciativas para reforzar y consolidar la responsabilidad en contextos de alta criminalidad.

Un enfoque incrementalista le concede incluso una mayor importancia al establecimiento de claros indicadores de progreso. Las presentaciones señalaron que una seria debilidad de las evaluaciones de los donantes de sus propios programas es la tendencia a enfocarse en los rendimientos (por ejemplo, la cantidad de policías entrenados) en vez de en los resultados (cambios en la conducta de la policía). Incluso si los indicadores se pueden identificar, ¿van a querer los donantes aplicarlos seriamente? Las discusiones anotaron que, a pesar de los importantes avances hechos en la definición de 'lecciones aprendidas' acerca de la ayuda internacional a la reforma policial, los donantes fracasan una y otra vez en aplicar las lecciones.

Si, como la mayoría de los y las participantes a la conferencia creían y argumentaban, la reforma policial se ha vuelto parte del arsenal de la ayuda para la construcción de gobiernos democráticos, entonces corresponde a los países y agencias que proveen la asistencia asegurarse de que aprenden y apliquen estas lecciones en el curso de sus programas de ayuda. Tal como está claro para cualquiera que se comprometa con reformas policiales, los riesgos de una ayuda policial son considerables, dado el poder coercitivo en juego en combinación con los elementos comunes de abusividad y culturas burocráticas autoritarias, corrupción y politización. Si los donantes apoyan las reformas policiales, deben asumir seriamente los riesgos e invertir lo necesario en su propio fortalecimiento institucional. ■

Tendencias divergentes en las relaciones cubano-estadounidenses

Por Lilah Rosenblum

Desde el pasado otoño las relaciones de Estados Unidos con Cuba han seguido dos tendencias divergentes, una cálida por el lado del gobierno cubano, partes del Congreso estadounidense, y sectores con intereses comerciales y agrícolas, y otra glacial que sopla desde la administración de Bush.

Tendencias cálidas

Cuba ha tenido recientemente varios gestos cordiales hacia Estados Unidos. El 11 de septiembre, el gobierno cubano fue el primer gobierno extranjero en responder a los ataques terroristas, condenando los ataques y el terrorismo en general, y ofreciendo asistencia médica a EE.UU. Cuba anunció también su voluntad de cooperar con todas las naciones para erradicar el terrorismo, y ratificó las doce convenciones de la Naciones Unidas sobre el terrorismo internacional.

Cuando el gobierno de EE.UU. decidió trasladar a los prisioneros talibanes y de Al Qaida a la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, el gobierno cubano anunció que devolvería a cualquier prisionero que escapara de la base. Este gesto fue especialmente notable debido a la tradicional resistencia de Cuba a la presencia militar estadounidense en la isla, y debido a su oposición a las actuales operaciones militares de EE.UU. en Afganistán.

En diciembre, en las semanas que siguieron al paso de huracán Michelle por Cuba, el gobierno cubano les compró a productores estadounidenses bienes agrícolas por un valor de 30 millones de dólares, y a comienzos de marzo del 2002, firmó contratos con productores estadounidenses para hacer compras por otros 25 millones de dólares.

A comienzos de marzo, el gobierno cubano arrestó a un destacado narcotraficante colombiano quien había escapado previamente de una prisión federal de Estados Unidos y está siendo pedido por la DEA. Actualmente, está detenido en Cuba y ha sido acusado de cargos de narcotráfico y uso de documentos falsos. Poco después de este arresto, Cuba sometió una serie de propuestas a Estados Unidos sobre migración, cooperación antidrogas y esfuerzos antiterroristas.

Por el lado de Estados Unidos, el Congreso ha demostrado repetidamente su interés en mejorar las relaciones cubano-estadounidenses. A pesar de los hechos del 11 de septiembre y del nuevo contexto político que se formó tras los ataques terroristas a los EE.UU., una mayoría en el Congreso ha continuado apoyando un relajamiento del embargo a Cuba. A mediados de diciembre, el Senado votó 61 contra 33 para suprimir de los proyectos de ley agrícolas el lenguaje que bloquearía una disposición de la ley agraria que permita el financiamiento privado de ventas agrícolas a Cuba. A finales de abril, la Cámara votó 273 contra 143 también a favor de estas disposiciones financieras. Estas fueron, no obstante, suprimidas del proyecto de ley por una conferencia de la Cámara y el Senado, bajo presión de la administración de Bush y del liderazgo republicano de la Cámara, antes de la aprobación final.

Adicionalmente, varias delegaciones del Congreso visitaron Cuba en los meses siguientes al 11 de septiembre, entre los cuales varios congresistas de ambos partidos interesados en el comercio agrícola con Cuba, y otros interesados en acabar con las restricciones a los viajes.

Tendencias glaciales

No obstante, la administración de Bush ha asumido una clara línea dura sobre Cuba durante los últimos meses. El nombramiento de Otto Reich, un cubano-americano conservador, al cargo de subsecretario de estado para asuntos hemisféricos occidentales, configuró esta posición dura. Desde su nombramiento, Reich ha publicado declaraciones públicas en defensa de la actual política cubano-estadounidense, apelando a favor de medidas que aislarían a Cuba aún más. Actualmente la administración está realizando una revisión de la política cubano-estadounidense, que se espera va a terminar en propuestas que van a endurecer más la política de EE.UU. hacia Cuba.

En su formulación de políticas para Cuba, la administración está en deuda con la comunidad de exiliados cubanos en Mi-

continuará en la página 12

Nueva publicación sobre Cuba

WOLA ha sacado una nueva publicación sobre Cuba, disponible en inglés solamente. El paquete educativo para activistas de base es titulado, "Ya es hora de cambiar: replanteamiento de la política cubano-estadounidense," que se puede obtener por US$5.00 más US$1.75 para gastos de correo por la primera copia, y US$3.00 más US$0.50 para gastos de correo por cada copia adicional. Para pedir una publicación, favor mandar un cheque a nombre de WOLA a: Cuba Publications, WOLA, 1630 Connecticut Avenue, NW, Suite 200, Washington, DC 20009. Favor indicar cuántos ejemplares desea ordenar. Para pedir cantidades grandes, favor de escribirnos por correo normal o electrónico (wola@wola.org) o llamarnos por teléfono al (202) 797-2171.

Drogas y democracia

viene de la página 2

Federal de Investigación (FBI), en América Latina. Haremos el esfuerzo de obtener información de difícil acceso sobre el nivel y tipo de ayuda canalizada hacia el adoctrinamiento y entrenamiento de las fuerzas policiales latinoamericanas, sus iniciativas de aplicarlos en colaboración, y cómo éstos han formado o influenciado los códigos legales de América Latina.

Los estudios de países e informes examinarán temas oportunos e importantes como:

- En **Colombia**, el escrutinio civil de la actividad militar es limitado y se han cometido graves abusos a los derechos humanos que el débil sistema judicial no ha sido capaz de afrontar. Algunos elementos militares mantienen lazos con las brutales fuerzas paramilitares. La fumigación para erradicar la coca está dañando el medio ambiente y afectando la salud de humanos y animales.
- **Bolivia** y **Perú** continúan siendo foco de las políticas antinarcóticos de EE.UU., lo que tiene consecuencias importantes para la democracia y los derechos humanos tanto en la esfera militar como en la de la sociedad civil. Para lograr sus objetivos antinarcóticos en el Perú, el gobierno estadounidense colaboró con Vladimiro Montesinos y con el Servicio Nacional de Inteligencia, responsables de abusos a los derechos humanos y de faltas a la democracia. En Bolivia, la política estadounidense ha apadrinado una estrategia de "cero tolerancia" para los cultivos de coca, lo que ha generado tremendas protestas sociales que han llevado a la confrontación violenta entre cultivadores de coca y fuerzas de seguridad, con un saldo de numerosos muertos en el 2001 y en años anteriores.
- **Ecuador** se ha vuelto cada vez más importante a causa del Centro Operativo de Avanzada (FOL, en inglés) del ejército de EE.UU., establecido allí, del apoyo estadounidense cada vez mayor a las fuerzas armadas ecuatorianas, del desbordamiento de los efectos generados por el Plan Colombia, incluyendo la posible contaminación por las fumigaciones, el problema de los refugiados y la creciente violencia en la región de la frontera norte.
- En A**mérica Central** el estudio expondrá algunos de los temas comunes en todo el istmo, incluyendo las relaciones entre la guerra a las drogas y la pérdida de confianza pública en la capacidad de los gobiernos nacionales para garantizar la seguridad ciudadana, el debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad, y los problemas de corrupción.
- El estudio de caso de **México** se enfocará en el apoyo estadounidense a políticas que amplían el rol del ejército en la seguridad pública y el combate a las drogas ilegales, así como en los serios problemas de corrupción y abuso dentro de las fuerzas de seguridad pública y el sistema judicial.
- De diferentes modos, el **Cono Sur** y el **Caribe** enfrentan también el impacto del narcotráfico y de las políticas estadounidenses para el combate a las drogas, lo que socava los esfuerzos para construir garantías de democracia y derechos humanos. WOLA producirá análisis regionales con estudios de los casos de Argentina y Puerto Rico. ■

Para más información sobre esta excitante iniciativa, no dude en ponerse en contacto con Eileen Rosin, directora del proyecto, a: **erosin@wola.org** *o al: 202-797-2171*

Actividades de WOLA

viene de la página 7

bia en numerosos medios de prensa escrita, radio y televisión. Entre estos: el *Christian Science Monitor*, *InterPress Service*, el *Latin America Monitor* del Banco Interamericano de Desarrollo, *Bloomberg News*, *El Tiempo* (Bogotá), *El Colombiano* (Medellín), BBC en español, *All Things Considered* y *LatinoUSA* en *NPR*, *RCN* (estación radial colombiana) *Pacifica Radio* y en el noticiero de la noche de *Telemundo*.

- Coletta Youngers, representante de WOLA, y Tamara Feinstein del *National Security Archive* fueron coautoras de un artículo que fue publicado en la revista mensual peruana *Idéele* sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación del **Perú**.
- La revista *Rolling Stone* publicó un artículo sobre **Colombia** con base en la información recogida durante el viaje a Colombia de una delegación acompañada por WOLA en febrero del 2001.
- Coletta Youngers, miembro de WOLA, fue entrevistada por la CNN Internacional, así como medios peruanos, como el periódico limeño *La República*, *Radio Programas del Perú*, y *Perú Económico* entre otros, sobre la visita del presidente Bush en marzo a Lima. ■

In Memoriam

Gloria Gaston-Shapiro
1927-2002

Queremos agradecer a una amiga de larga data de WOLA quien ha hecho una generosa donación en memoria de la Sra. Gaston-Shapiro, funcionaria retirada del servicio exterior y ex funcionaria de Derechos Humanos de la misión estadounidense de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Desde WOLA hacemos extensivas nuestras condolencias a toda su familia.

Personal de WOLA

Bill Spencer
Director Ejecutivo

Coletta Youngers
Representante,
Región Andina y Política
Anti-Narcóticos

Rachel Neild
Representante, Haití,
el Cono Sur y Asuntos
Policíacos

Geoff Thale
Representante,
El Salvador, Cuba y
Nicaragua

Kathryn Powell
Directora, Desarrollo
Institucional

Jason Hagen
Representante, Colombia

Lori Piccolo
Desarrollo Financiero

Jana Kurtz
Directora de Operaciones

Nadia Malley
Gerente Financiera

Vicki Gass
Consultora, Asuntos
Económicos y Huracán Mitch

Elsa Falkenburger
Asistente, Desarrollo Institucional

Tina Hodges
Asistente, México y
América del Sur

Rachel Farley
Asistente, Centroamérica

Eileen Rosin
Coordinadora, Proyecto
Políticas Anti-Drogas

Adriana Beltrán
Coordinadora de Medios
y Enlace de Capacitación
en Incidencia

Programa de Capacitación en Incidencia

Oficina en Honduras:
Salvador Segovia
Capacitador

Oficina en Nicaragua:
Cirilo Ortega
Capacitador

Leandro Martínez
Asistente Administrativo

wolanica@ibw.com.ni

E.E.U.U. y Cuba

viene de la página 10

ami, que aunque pequeña, tiene voz, por dos razones importantes. Primero, el presidente se siente en deuda con la comunidad cubano-americana de Florida a causa de su estrecha victoria ante el demócrata Al Gore en ese estado en el 2000. Probablemente el presidente esté contemplando también las elecciones del 2004. Y segundo, el gobernador de Florida y herm-ano del presidente, Jeb Bush, se está presentando a su reelección en noviembre. Una oposición del presidente a la comunidad cubano-americana de Miami comprometería las posibilidades de su hermano para un segundo período. En esta puja por los votos de Florida, parece que Bush está dispuesto a ignorar el deseo de amplios sectores de la población estadounidense y del Congreso. Solamente el tiempo dirá si este apoyo arrollador dentro del Congreso y de la población, junto con los esfuerzos conciliadores del gobierno cubano lograrán eventualmente aflojar este bloqueo sobre la política de EE.UU. para Cuba ■

WOLA

Washington Office on Latin America
1630 Connecticut Avenue, NW
Washington, DC 20009